



“El final de la guerra civil: Almería, marzo de 1939”

Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz
Universidad de Almería

A finales de marzo de 1939, como en el resto de España, la guerra se acababa en Andalucía. Desde la caída de Málaga y el posterior avance de las tropas franquistas hasta posiciones cercanas a la provincia almeriense, hechos producidos un par de años antes, apenas habían variado los frentes de batalla en la región. Es decir, tras finalizar el primer invierno vivido en conflicto, el Gobierno republicano sólo ejercía el control en las provincias de Almería y Jaén (salvo unos pocos municipios en esta última), en las comarcas orientales de Granada (Guadix-Baza) y en algunas localidades del norte de Córdoba. Así, cuando había transcurrido poco más de un semestre de guerra, los sublevados ya habían dominado seis de las ocho capitales andaluzas, permaneciendo únicamente Almería y Jaén en zona republicana. De hecho, la provincia almeriense fue la única que se mantuvo íntegramente en dicha zona durante todo el tiempo que duró el enfrentamiento armado. Además, no llegaron a existir frentes de guerra establecidos en su circunscripción durante los 33 meses que duró el conflicto.

Una guerra vivida en la retaguardia

En Almería, la sublevación militar del verano de 1936 había fracasado fundamentalmente debido a tres causas: la falta de unidad y coordinación entre las fuerzas militares y derechistas, unida al retraso en declarar el estado de guerra; la activa oposición de milicias populares, apoyadas por miembros de la Guardia de Asalto en la sede del Gobierno Civil; y, sobre todo, la amenaza de bombardeo que realizó el destructor *Lepanto* si los rebeldes no deponían las armas. Esto ocurría en la

Para citar este trabajo se recomienda el siguiente formato:

QUIROSA-CHEYROUZE Y MUÑOZ, Rafael: "El final de la guerra civil: Almería, marzo de 1939", en *Andalucía en la Historia*, nº 5 (2004), pp. 27-31.

Disponible desde Internet en:

<<http://www.historiadeltiempopresente.com/Revistas/Textos/RT26.pdf>>.



capital el 21 de julio de 1936 y pocas horas después quedaban dominados los pequeños conatos insurgentes que se habían producido en la provincia almeriense.

Tal y como ocurrió en toda la retaguardia controlada por las fuerzas del Frente Popular, los primeros meses de guerra se caracterizaron por la presencia activa de los comités, organismos formados por representantes de sindicatos y partidos obreristas, que se convirtieron en poderes paralelos a las instituciones del Estado. En esta coyuntura inicial se produjeron las principales alteraciones en la propiedad y en los sectores productivos, así como el intento de desencadenar un proceso revolucionario como respuesta a la insurrección militar. Tampoco hay que olvidar que en esta etapa se ejecutó a más del 80 por ciento de las personas represaliadas en la provincia almeriense durante toda la guerra.

La situación se modificó radicalmente a partir del mes de noviembre de 1936, tras la llegada de Gabriel Morón al Gobierno Civil de Almería. Este socialista cordobés, nombrado por el gabinete de Largo Caballero, consiguió llevar a cabo la reorganización de la retaguardia almeriense. El proceso supuso la desaparición en la práctica de los comités como órganos ejecutivos, el control del poder desde las instituciones del Estado y el fin de la violencia que había caracterizado la etapa anterior.

A partir de la constitución del primer Gobierno de Negrín, en mayo de 1937, podemos decir que el resto de la guerra se resumía en dos palabras para los republicanos: resistencia y supervivencia. La primera fue siendo contrarrestada continuamente por los avances de los ejércitos de Franco; la segunda, con más incidencia en las zonas de retaguardia, se había convertido en la lucha diaria para la mayor parte de la población. En cualquier caso, las derrotas militares que vencían la resistencia y las dificultades que los ciudadanos encontraban para sobrevivir minaron la moral de victoria de las localidades que permanecían en la zona no controlada por los franquistas. Si a este panorama añadimos las divergencias producidas entre los sectores políticos que luchaban contra la sublevación, podremos entender mejor lo ocurrido al final de la guerra, objetivo principal de estas páginas.



La mencionada supervivencia tenía que enfrentarse con dos obstáculos: la carestía en alimentos y los bombardeos enemigos. Uno de los principales problemas que tenía que afrontar la población era la escasez de artículos de primera necesidad, situación que se fue agravando conforme avanzaba el curso de la guerra. La llegada continua de evacuados que habían huido de las zonas ocupadas por el enemigo aumentó considerablemente la situación. Así, si estudiamos la actividad de las instituciones locales y provinciales en estos meses finales del conflicto, observaremos como las dificultades de abastecimientos ocupaban la atención prioritaria de los gobernantes. Además, los incidentes y conflictos derivados de la situación de escasez se hicieron cada vez más frecuentes.

Pero, junto al hambre, otro peligro amenazaba a los ciudadanos de la retaguardia almeriense. Nos referimos a los bombardeos realizados por la aviación franquista sobre la población civil. Ya en 1937 se habían producido violentos ataques sobre la capital, destacando los realizados en la noche del 5 de enero, el día 12 de febrero sobre los huidos de Málaga establecidos en el puerto, así como el protagonizado por la escuadra alemana a finales del mes de mayo y que tantas repercusiones internacionales suscitó. Los bombardeos propiciaron una política de construcción de refugios en la capital, impulsada especialmente desde el Partido Comunista. Los ataques se mantuvieron durante el último año de guerra, provocaron el pánico en la población y contribuyeron al desánimo de los defensores de la República.

Los últimos meses de guerra

Salvador Sánchez Hernández, dirigente del Sindicato Nacional Ferroviario de Valencia (UGT), fue nombrado gobernador civil de Almería a mediados de noviembre de 1938. Al tomar posesión de su cargo se encontró una provincia con dos graves problemas: los enfrentamientos entre distintos sectores políticos y sindicales, y la creciente actividad de los partidarios de la victoria franquista establecidos en la retaguardia.



La evolución de la guerra, con las consiguientes derrotas del ejército de la República, favoreció el aumento de las divergencias entre los grupos que apoyaban al Gobierno republicano. Si los anarquistas y los sectores afines al largocaballerismo ya habían mostrado sus discrepancias con el gabinete de Negrín en 1937, los enfrentamientos entre los socialistas de Prieto y los comunistas debilitaron más aún la coalición gubernamental. Paralelamente, la desmoralización derivada de los fracasos militares y las carencias sufridas en la retaguardia por la población, habían ido fomentando y generalizando el deseo de terminar la guerra cuanto antes. Los integrantes de los partidos republicanos (IR y UR) y los militares profesionales destacaban en estas posiciones. Aquí estuvo, precisamente, el origen del golpe de Estado encabezado por el coronel Casado en marzo de 1939.

Con esta situación general de fondo, los enfrentamientos entre anarquistas y comunistas se recrudecieron en la retaguardia almeriense. Así, en un acto público celebrado el 20 de noviembre de 1938, el dirigente libertario Juan Santana Calero no dudó en afirmar “España, quieran o no los que pretenden imponernos programas exóticos, no obedece ni obedecerá a Berlín o Moscú”, en clara alusión crítica al Partido Comunista.

Los anarquistas también se enfrentaron con el nuevo gobernador, al que acusaban de menospreciar las funciones de los comités de enlace UGT-CNT. En un artículo publicado en el diario *Emancipación* se decía:

“Hay una autoridad, la más alta autoridad de la provincia, que dijo hace unos días que no venía a comerse a los niños crudos. Con su conducta estafalaria y desordenada, nos da la sensación de dos cosas: o que viene a comerse a toda Almería o que pretende llamar la atención, popularizarse, a base de golpes, aunque estos golpes no vengan a cuento”.

La mala imagen que estos enfrentamientos provocaban en la opinión de los almerienses, originó que el Comité Provincial del Frente Popular, en una reunión celebrada en diciembre de 1938, adoptara el acuerdo por el que “todos los partidos y organizaciones que lo integran hacen público el compromiso adquirido por todos ellos de no tratar en sus respectivos órganos de prensa nada que pueda servir de molestia a ninguno y que pudiera rozar la estrecha unión y la perfecta compenetración que los liga”.



La denominada “quinta columna”, creada en los primeros momentos de la guerra, se había desarrollado en la provincia durante el período del comunista Vicente Talens Inglá como gobernador, entre julio de 1937 y abril del año siguiente. Es cierto que su sucesor, el dirigente metalúrgico vasco Eustaquio Cañas Espinosa, había endurecido las disposiciones de orden público, aumentando las detenciones de sospechosos y dificultando su puesta en libertad. No obstante, todas esas medidas no consiguieron acabar con las actuaciones de los que luchaban contra la República desde su propia retaguardia.

Las actividades clandestinas consistían, fundamentalmente, en transmitir información —sobre todo de carácter militar— al bando franquista, boicotear el reclutamiento de hombres para el ejército republicano, conseguir y distribuir dinero, víveres o ropa para los que estaban ocultos, esconder a las personas perseguidas por la policía por motivos políticos y facilitar el pase de los derechistas a la otra zona. Al frente de estas actividades, a lo largo de 1938, encontramos a personas destacadas como Carmen Góngora, presidenta del Sindicato católico “La Aguja”, y Manuel Fernández Aramburu, jefe de la llamada “Red Hataca”.

También sabemos que en los últimos meses se había constituido una Junta Provincial de Falange en la clandestinidad, con Francisco Ibarra Sánchez y Fernando Brea Melgarejo como principales responsables. Si atendemos a sus propias declaraciones, efectuadas tras el final de la guerra, llegaron a contar con casi tres centurias organizadas, consiguiendo armas mediante compra o donación. Hoy conocemos la infiltración de los “quintacolumnistas” almerienses en unidades de la Guardia de Asalto, Artillería y Carabineros.

La situación tras el golpe de Casado

La ocupación de Cataluña por las tropas franquistas, completada en febrero de 1939, aceleró el final del régimen republicano. No en vano, en los últimos días de dicho mes, Gran Bretaña y Francia reconocieron el Gobierno del general Franco, y Manuel Azaña dimitió de la presidencia de la República. Aunque Juan Negrín y sus



ministros regresaron a territorio español, muchos de los que habían atravesado la frontera de los Pirineos no pudieron o no quisieron volver.

La política de resistencia mantenida por el Gobierno, criticada ya por amplios sectores, fue finalmente vencida por el golpe de estado que encabezó el coronel Segismundo Casado el día 5 de marzo de 1939. La operación había sido apoyada por militares, líderes anarquistas, dirigentes republicanos e, incluso, socialistas que no compartían la línea de actuación representada por Negrín. Sólo los comunistas se opusieron, incluso con las armas, al golpe de Casado, aunque fueron pronto dominados. Los responsables de la acción militar constituyeron el denominado Consejo Nacional de Defensa, presidido por el general José Miaja, y durante tres semanas intentaron pactar con Franco una “paz honrosa”. El líder de los sublevados sólo aceptó una rendición incondicional de los republicanos.

En Almería, el nuevo órgano de poder recibió la adhesión de las autoridades civiles y militares de la provincia. Así se manifestaron, por ejemplo, el teniente Julián del Castillo, comandante militar de la plaza, o Cayetano Martínez Artés, presidente del Consejo Provincial (antigua Diputación). Además, dirigentes republicanos, socialistas, anarquistas y de la UGT apoyaron también al Consejo Nacional de Defensa. En los afiliados al Partido Comunista almeriense los acontecimientos provocaron importantes divisiones. Algunos, como el secretario general Juan García Maturana, mantuvieron su postura firme de apoyo al Gobierno Negrín y contraria al golpe de Casado. En cambio, el alcalde Manuel Alférez Samper y otros miembros del Comité Provincial del PCE, optaron por adherirse públicamente a las nuevas autoridades.

Como consecuencia de la situación, los comunistas que no habían reconocido la legitimidad de los nuevos gobernantes fueron perseguidos y encarcelados. En este sentido, destaca la clausura del *Diario de Almería*, órgano del PCE en la provincia, y de los locales del partido y de organizaciones próximas (Mujeres Antifascistas, Amigos de la Unión Soviética, Unión de Muchachas, Juventudes Socialistas Unificadas y Altavoz del Frente). Al mismo tiempo, los comunistas que no pudieron



ser detenidos designaron un nuevo comité provincial en la clandestinidad, presidido por Ángel Aguilera Gómez.

El final de la guerra estaba próximo. Hubo dirigentes del bando republicano que no quisieron salir de España, ya fuera por el convencimiento de no haber cometido ningún delito, o por creer en la “paz honrosa” que intentaba negociar el coronel Casado con Franco. Otros, en cambio, más realistas y conscientes de la represión que se iba a iniciar por parte de los vencedores, intentaron huir al extranjero. Algunos, como Manuel Alférez, alcalde de la capital, o Cayetano Martínez Artés, presidente del Consejo Provincial, no lo consiguieron y, tras juicio sumarísimo, fueron fusilados a los pocos meses de terminar la guerra. Los principales dirigentes del PCE o la JSU, a pesar de que muchos de ellos habían estado detenidos hasta el día 28 de marzo, consiguieron escapar en un barco en la madrugada siguiente, pocas horas antes de que los franquistas dominaran la ciudad.